

[1984]

VISION DE CONJUNTO DE LAS ELECCIONES DE 1984

Ignacio Ellacuría

Las elecciones presidenciales de 1984 en El Salvador se han convertido en lugar apropiado para determinar la actual coyuntura del país y para avizorar su futuro inmediato. Este doble objetivo no es alcanzable si no se desentraña su complejidad y, al mismo tiempo, se intenta conseguir una visión de conjunto que englobe los múltiples elementos que en ellas concurren. Buena parte de esa complejidad se desprende de los anteriores artículos, en los que se han examinado distintos aspectos del proceso electoral. Teniendo en cuenta ese examen se pretenderá en este artículo conclusivo alcanzar esa visión de conjunto.

1. La presencia norteamericana en el planteamiento electoral

El proceso electoral salvadoreño recién pasado, como el anterior de 1982 (cfr. ECA, Abril y Mayo-Junio, 1982) entra a formar parte de un plan más amplio que para Centroamérica tiene trazado la Administración Reagan. Ese plan presupone que los procesos electorales darán paso a regímenes y gobiernos favorables a Estados Unidos y a su política en el área. Esa política está definida por el intento de dar la máxima seguridad a los intereses norteamericanos, lo cual implica por un lado impedir al máximo la presencia de regímenes y gobiernos que puedan ser favorables a la Unión Soviética y, por otro, lograr un desarrollo económico y político que impidan levantamientos populares favorecedores de los procesos revolucionarios. Como el primer aspecto prima sobre el segundo, el acento estará puesto sobre todo en lo militar, al menos a corto plazo, con lo que las soluciones políticas que



dan subordinadas a las soluciones militares.

Dentro de este contexto general hay que interpretar las elecciones salvadoreñas, las cuales responden hasta cierto punto a intereses y existencias salvadoreños, pero responden sobre todo a intereses y exigencias norteamericanos. Una cosa no excluye la otra, pero conviene tener en cuenta que no sólo se dan esos dos aspectos simultáneamente sino que se dan estructuralmente, de modo que los intereses salvadoreños se subordinan a los norteamericanos y no viceversa.

El interés y el influjo de la Administración Reagan sobre el proceso electoral salvadoreño han sido en sí mismos manifiestos y son, por tanto, indiscutibles. Fue esa Administración la que propuso el que se tuvieran y el que se tuvieran en 1983, lo cual no se pudo porque fue imposible acelerar los preparativos indispensables de tipo legal y logístico. Fue esa Administración la que proporcionó los recursos económicos y técnicos para que se pudiera llevar a cabo el proceso con la suficiente eficacia y credibilidad, hasta el punto que se ha dicho que los salvadoreños sólo pusieron los votos, mientras que casi todo lo demás fue puesto desde fuera. Fue esa Administración la que de múltiples formas favoreció la candidatura de Duarte, llegando incluso la CIA a invertir fuertes sumas de dinero en ayuda encubierta, como ha sido publicado y no desmentido en Estados Unidos. Fue esa Administración la que potenció internacionalmente los resultados para que el propio pueblo norteamericano así como otros pueblos retuvieran la imagen de que se había dado un paso decisivo en la democratización de El Salvador.



Todo ellos nos lleva a preguntarnos sobre lo que pretendía la Administración Reagan con este gran esfuerzo en favor del proceso electoral, un es fuerzo por otra parte bastante apresurado pues unas elecciones tan complejas hubieran necesitado de una mayor preparación, legal, política y técnica.

Una primera respuesta puede deducirse del hecho de que el presidente Reagan se presente a la reelección en este mismo año, por lo cual necesitaba ofrecer al pueblo norteamericano una imagen nueva que paliara la que se había producido en los tres años anteriores. En esos tres años, efectivamente, la situación de El Salvador que Reagan y Haig creyeron poder resolverla con relativa facilidad para mostrar su capacidad de frenar el expansionismo soviético en el área, lejos de haber mejorado, había empeorado gravemente: el FMLN que en Enero de 1981 mostró una muy escasa potencia militar, quintuplicaba su potencial bélico en los tres años subsiguientes; los muertos y desaparecidos en flagrante violación de los derechos humanos alcanzaban en El Salvador durante la administración Reagan una cifra superior a los 25,000; la guerra civil y sus efectos se dejaban sentir tras estos tres años no sólo en algunos lugares del país sino que su presencia se extendía a una tercera parte del territorio nacional. Junto a estos factores enormemente negativos que muestran lo erróneo de la política norteamericana, podrían señalarse otros factores positivos, pero éstos no podían ni mucho menos equilibrar la balanza y, menos aún, inclinarla a favor. Hasta se llegó a decir por la propia administración Reagan y en repetidas ocasiones que sin enormes y rápidos aumentos de ayuda militar se corría el inminente riesgo de que en 1984 todo El Salvador cayera en manos del FMLN.



¿Puede hablarse de fracaso mayor tras tres años de continua intervención?

La segunda respuesta va más allá de los intereses electorales de Reagan. Los estrategas norteamericanos han estado proclamando que en Centroamérica se está librando una batalla decisiva entre el Este y el Oeste. Esa batalla es predominantemente militar y sus vanguardias son Nicaragua y los movimientos revolucionarios de El Salvador y de Guatemala. Para derrotar a estas vanguardias se necesita una fuerte presencia militar norteamericana, la cual exige una justificación al interior de los países centroamericanos. Esa justificación se busca al menos en tres frentes: la defensa contra el influjo soviético, el apoyo a regímenes democráticos, la petición que estos mismos regímenes democráticos hacen de la ayuda norteamericana. El planteamiento exige que se den procesos electorales con buena imagen, que permita hablar de regímenes democráticos y de gobiernos elegidos libremente.

Desde esta segunda respuesta debe decirse que las elecciones de El Salvador no sólo están en consonancia con los propósitos norteamericanos y subordinadas a éstos sino que entran a formar parte de un plan más amplio, cuyo elemento más definitorio es el aplastamiento de los movimientos revolucionarios marxistas a través incluso de la intervención militar, siempre que ésta sea necesaria o simplemente conveniente. Las elecciones tienen como propósito inmediato dar cobertura política y democrática a lo que se estima ser una necesidad estratégica: la derrota militar más o menos definitiva y total de los movimientos revolucionarios, en el caso de El Salvador del FMLN. Esta derrota militar requiere cuantiosos aportes económicos que deben ser



aprobados por el Congreso de Estados Unidos. Por diversas razones esta aprobación no resulta fácil, pero será mucho más fácil si es pedida por un gobierno democrático, surgido de unas elecciones libres y decidido a llevar una política aceptable de derechos humanos.

Este planteamiento no sólo exigía unas elecciones prontas sino que además dibujaba quiéⁿ era el ganador más conveniente para Estados Unidos. Se necesitaba que fuese el ganador un partido y un presidente que fuera más presentable al pueblo y al Congreso de Estados Unidos. Se sabía que esto era más difícil en el caso de ARENA y de D'Aubuisson. En consecuencia había que trabajar para excluirl^{os}. Y así se hizo sistemáticamente en el interior y fuera del país. Lograda esta exclusión, no había preferencia especial ni por el PDC ni por el PCN ni por AD. La decisión en favor del PDC vino cuando las encuestas constataron que era respaldado por un sector mayoritario del electorado salvadoreño. Esto permite decir, en una lectura más benévola, que la administración Reagan no está en desacuerdo con lo que desea una mayoría de la población salvadoreña y, a su vez, que el pueblo salvadoreño no está en desacuerdo con lo que desea para El Salvador la administración Reagan. Pero estas afirmaciones tienen un alcance más aparente que real, si es que se analiza a fondo el proceso electoral, pues en éste no se planteó la plataforma del PDC como la que mejor se acomodaba a los deseos de la Casa Blanca.

Finalmente la Casa Blanca apostó por Duarte como la solución más apta para llevar adelante sus planes sobre El Salvador. A su vez, Duarte ve en los planes de la Casa Blanca, la solución más realista para El Salvador. No



se prevé por tanto ninguna discrepancia seria entre ambos, sea porque no exista de parte de Duarte, sea porque Duarte no ve otra manera efectiva de gobernar que la de plegarse en todo al proyecto norteamericano. De hecho todas las declaraciones de Duarte se muestran en franca coincidencia con los propósitos norteamericanos: hace falta mayor ayuda militar, ayuda militar que no debe ir condicionada a la mejora en los derechos humanos; un país democrata que está en peligro debe ser ayudado; no habrá presencia de tropas norteamericanas pero sí de asesores; se favorecerán las reformas y el desarrollo económico; se alabará a Contadora pero no se le hará caso alguno en lo que tiene de rechazo de las intervenciones militares, etc. No hay, pues, discrepancias ni ideológicas ni prácticas. Pero en caso de que las hubiera, no hay duda de quien iba a ceder. Hay una guerra que no se puede perder; el que no se pueda perder depende fundamentalmente de Estados Unidos; será, por tanto, Estados Unidos quien tenga la última palabra en todos los problemas decisivos para la conducción de la guerra, incluidos los problemas políticos que se relacionan con ella. Naturalmente esto no quiere decir que el nuevo Gobierno y otros poderes fácticos del país no tengan su campo de maniobra. Pero este campo es limitado y ni siquiera en ese campo limitado se podrá ser la instancia última autosuficiente.

Pero que la administración Reagan haya sido uno de los elementos determinantes de las elecciones, no quiere decir que éstas no tengan valor alguno. Estados Unidos ha querido que haya elecciones en El Salvador, pero ha querido que haya elecciones. Estas, a su vez, han sido queridas por diversas fuerzas sociales salvadoreñas y aun por buena parte del pueblo



salvadoreño. Esto hace que tengan un carácter propio que es preciso analizar. No se puede pasar de largo por el hecho electoral desautorizándolo en bloque porque es una parte del proyecto norteamericano, como tampoco se puede caer en la ingenuidad de considerarlo como un acontecimiento puramente interno y nacional que no haya tenido mucho que ver con los intereses y planes norteamericanos para El Salvador y para toda la región centroamericana.

2. Análisis del carácter democrático de las elecciones

En general y en abstracto puede asegurarse que en un país no democrático no puede haber elecciones plenamente democráticas; puede a continuación afirmarse que El Salvador no es actualmente un país democrático, para concluir de ahí que las pasadas elecciones no son democráticas. Pero también podría afirmarse que las elecciones han sido democráticas y que de ese hecho se deduce que el país es fundamentalmente democrático, por la misma razón de que no pueden darse elecciones democráticas en un país que no lo es. Para solventar esta cuestión, referido el problema a las elecciones de El Salvador, no queda sino volverse a la realidad para calibrar en ella el carácter democrático que les corresponde. Es, sin embargo, válida la idea de que no puede haber elecciones plenamente democráticas en un país no plenamente democrático y la constatación de que El Salvador dista actualmente mucho de poder ser considerado como un país plenamente democrático.



a) Aspectos negativos.

Efectivamente no se pueden desconocer los fuertes condicionamientos que limitan seriamente el valor democrático de estas elecciones como expresión ajustada de la voluntad popular, de tal modo que pueda admitirse que en esta ocasión ha habido una clara manifestación de la voluntad general. El propio Embajador de Estados Unidos en El Salvador, Pickering, tuvo que recordar que también Lincoln tuvo elecciones difíciles en plena guerra civil, como es el caso de El Salvador. Sólo que en el caso de El Salvador es todavía más difícil.

Está, desde luego, el problema de la guerra civil, una guerra civil causada fundamentalmente por falta de condiciones democráticas. En efecto, el estallido de la violencia revolucionaria en El Salvador se debe principalmente a un estado secular de injusticia estructural (primer factor no democrático), a una violencia represiva institucionalizada que impedía la organización social (segundo factor no democrático) y a un desprestigio de los partidos y de las elecciones por la reiterada deformación de los resultados electorales en favor de quienes eran responsables de la violencia estructural y de la violencia institucional (tercer factor no democrático). Por lo tanto, no es sólo que la guerra civil dificulte el proceso electoral de múltiples formas, sino que, al ser la compleja expresión de un cúmulo de factores no democráticos, hace visible y palpable el carácter no democrático de la situación en la que son convocadas las elecciones.



En relación con la guerra civil está el clima de terror generalizado que dificulta seriamente la convivencia social y todo asomo de actividad política seriamente opositora y contestaria. Ya el clima de terror desfigura los sentimientos y polariza las actitudes, lo cual lleva consigo fuertes limitaciones a la hora de votar libre, tranquila y responsablemente. El clima de terror facilita el voto extremista, que tendría menor cuantía si las circunstancias fueran más estables. Pero ese mismo clima de terror hace sumamente difícil, cuando no imposible, la organización política y su consiguiente movilización y expresión, cuando éstas son el objeto más directo de la campaña de terror. En este clima es absolutamente impensable que la oposición que está en el lado contrario de la guerra pueda presentarse a unas elecciones organizadas por quienes la están conduciendo. Pero no sólo esa oposición alzada en armas o aliada de los alzados en armas está imposibilitada de hacer propaganda efectiva de sus postulados y de sus propósitos. Tampoco había lugar en ese clima de terror para aconsejar la abstención por parte de quienes pensarán que no se daban las condiciones requeridas para que las elecciones alcanzaran un grado de validez democrática aceptable.

Esto hacía que los electores tuvieran realmente poco entre qué elegir. Una de las partes fundamentales en el litigio era sencillamente ineligible. Efectivamente al proceso electoral se presentaban tan sólo partidos que van del centro a la extrema derecha. Ninguno de los partidos representaba posiciones de izquierda, de modo que la Democracia Cristiana, conocida en todo el mundo por sus posturas generalmente derechistas (Alemania, Holanda y Bélgica, España, Italia, Venezuela, Panamá, etc.), es la



corriente más a la izquierda que se presentaba en El Salvador. Esto limita significativamente el valor manifestativo de la voluntad popular, porque no había posibilidad efectiva de expresión de la voluntad de izquierda por cuanto ésta no era perceptible por sí misma sino tan sólo por las desfiguraciones propagandísticas que de ella vienen haciendo habitualmente sus opositores en estos últimos cuatro años y que se hicieron especialmente virulentas en los meses anteriores al día de las elecciones. No se olvide, por otra parte, que el partido acusado repetidamente de ser proclive a ideas de izquierda -se equiparaba el comunitarismo de Duarte con el comunismo del FMLN- es el que triunfó, lo cual permite una lectura un tanto favorable al FDR-FMLN o, al menos, impide que se lea el voto popular como un rechazo en todos los casos a posiciones más de izquierdas que las representadas por el PDC.

La fuerte propaganda electoral limitada tan estrechamente, no contrarrestada por una propaganda equivalente en sentido contrario, impide conocer cuáles son los sentimientos, las actitudes y las decisiones virtuales de una gran parte de la población. Los grandes partidos pudieron hacer propaganda más o menos equiparable o, por lo menos, suficiente para hacerse escuchar. Nada de esto fue posible al FDR-FMLN. A la falta de posibilidad de organización pública del FDR-FMLN entre los sectores más densamente poblados en razón de la violencia armada que se ha perpetrado contra ellos a lo largo de estos cuatro años, hay que añadir la falta de propaganda política eficiente. De todo lo cual se puede concluir que otra forma de propaganda y otra posibilidad de organización hubiera permitido



al pueblo salvadoreño inclinarse presumiblemente por otras opciones. Tam poco aquí conviene olvidar que la mayoría se decantó por la opción más progresista de las ofrecidas y la menos opuesta a alguna forma de diálogo con el FDR-FMLN. Lo importante, sin embargo, es subrayar la desviación de voto que necesariamente trae consigo una fuerte campaña electoral como la que se tuvo, en la que no era posible escuchar con parecida insistencia las razones de quienes pensaban distinto de los que tuvieron posibilidad de sacar provecho de una propaganda intensísima. Conclusión tanto más justificada cuanto que las posiciones del FDR-FMLN fueron positivamente desfiguradas.

El estado de sitio también limita la validez democrática de estas elecciones. De nuevo no es tanto el hecho en sí del estado de sitio, prácticamente levantado durante el proceso electoral. Es más bien la situación general de intranquilidad que lo justifica según el dictamen de la Asamblea Legislativa que cada mes prolonga su existencia. Hace más de cuatro años vivimos en estado de sitio y ese estado de sitio impide la organización, la movilización, la expresión de los disidentes y opositores fundamentales a quienes están en el poder y a quienes aspiran a conseguirlo en el marco actualmente definido. En estas condiciones el trabajo político opositor es prácticamente imposible. Lo es legalmente y lo es prácticamente porque no debe desconocerse u olvidarse que la mayor parte de los 40,000 asesinados pertenece a simpatizantes de los movimientos populares.



Todo este cúmulo de circunstancias, a la par que muestra la situación

no democrática del país, indica los límites graves que han de atribuirse al carácter democrático de las elecciones.

Otro tipo de circunstancias que afectan más directamente al proceso electoral mismo pueden poner en duda el carácter democrático de las elecciones.

Así tenemos el caso del registro electoral, cuyas deficiencias no permiten hablar de que todos los salvadoreños en edad y condición competentes pueden votar y sólo pueden hacerlo una vez. El error del registro y, en conexión con él, el error de los listados electorales hizo, sobre todo en la primera vuelta, que cerca de un 10% de los que quisieron votar no pudieron hacerlo. Pero éste puede considerarse como un defecto menor no intencionado, por el que no pueden ser tildadas las elecciones de no democráticas.

Más grave es el caso de quienes fueron impedidos de votar por la situación forzada en la que se encuentran. Tal es el caso de los que han tenido que huir del país que fácilmente supera en 12% del voto total posible. Tal es el caso de quienes no han podido votar en sus propios municipios, caso relativamente alto, aunque el problema no se da en municipios muy poblados. Estas limitaciones, corregidas en parte por las urnas departamentales y nacionales, aunque muestran y comprueban un elevado índice de anormalidad, no son suficientes para hablar de elecciones no democráticas.



Tampoco se han dado acusaciones importantes que indicaran un fraude apreciable tanto a la hora del voto como a las múltiples horas del recuento. Irregularidades las hubo, pero no en grado tal que se pudiera negar la validez democrática del proceso por este capítulo del fraude. Ni siquiera, a pesar del aparentemente increíble alto número de votos, se puede asegurar que hubo un incremento fraudulento proporcional de votos. En general, respecto de las condiciones técnicas y respecto de la voluntad de evitar el fraude, puede decirse que las elecciones de 1984 han sido las menos fraudulentas de toda la historia moderna en El Salvador hasta el punto que los niveles formales de aceptación pueden considerarse altos para lo que es posible en nuestros países. La no validez democrática o las limitaciones de esta validez ha de buscarse en otro tipo de razonamientos, tal como se hizo en los primeros párrafos de este apartado y en la dependencia que tuvo todo el proceso de la voluntad declarada de la administración Reagan.

b) Aspectos positivos.

Lo primero que hay que resaltar es el alto número de votos que en las elecciones de 1984, a diferencia de las elecciones de 1982, responde a un alto número de votantes, controlados por su nombre propio y por su número de cédula. Si los cálculos que la revista ECA hizo para las elecciones de 1982 fueron correctos, en aquella ocasión no votaron más de 1,100,000, aun que los resultados oficiales dieron el número de 1,551,687 (cfr. ECA, Mayo-Junio, 1982, pp. 573-596), con lo cual tendríamos que en 1984 habrían votado cerca de 500,000 ciudadanos más. Si esto es así, hay que reconocer un



crecimiento muy significativo en la voluntad de votar, que en principio implica un incremento notable en la voluntad de participación democrática. Algunos partidos aceptaron nuestra argumentación de entonces para considerar muy aumentado el número de votos. Hoy hay que reasumir ese dato y sacar las consecuencias.

Pero prescindiendo de este posible aumento que sería tan significativo, hay que admitir que el número de votantes en las dos rondas ha sido muy alto con el matiz además de que hubo más votos en la segunda que en la primera vuelta. Cerca de un 60% de los votantes absolutamente posibles acudió a las urnas, a pesar de todas las dificultades, y de los votantes realmente posibles, lo hizo cerca de un 80%. El hecho, pues, del carácter multitudinario y mayoritario de los que votaron es innegable. Su explicación es más discutible así como lo es el reconocimiento de la plena validez democrática de este hecho. Pero alguna explicación coherente hay que dar, so pena de dar la espalda a la realidad.

No es coherente, por ejemplo, decir que tan alto número se debió al temor. Ciertamente hay temor en el país, ciertamente había temor a no votar, sobre todo en la primera vuelta. Pero no se votó por temor y sólo por temor, pues si así hubiera sido el número de votantes nulos o de abstenciones tendría que haber sido mucho más alto. Ahora bien, si tomamos en consideración la segunda vuelta, donde el total de votos fue de 1,524,079, los votos nulos y las abstenciones sólo suman 113,559, de los cuales no todos pueden interpretarse como rechazo consciente del proceso electoral, al que se ha-



bría acudido por temor a no ser sometido a represalias. Por otro lado, las encuestas previas daban un índice muy alto de decisión de votar y, aun que en esas mismas encuestas se detectaba la existencia del temor reinante, no aparecía que fuera el temor la razón decisiva para ir a votar. Alegar que el mismo temor llevaba a dar razones para votar que no fueran el temor, es en sí posible, pero no hay evidencias clara que lleven a esa conclusión.

Es posible, sin embargo, que muchos votos se dieran por temor a que ganara uno de los contendientes. Es decir que hubiera un alto número de votos que no eran propiamente a favor sino más bien en contra. Había temor en algunos de que ganara ARENA por la imagen que ese partido tiene de ser propenso a la violencia y a medidas totalitarias; por el contrario, había temor en otros de que ganara el PDC porque su triunfo pudiera llevar a negociaciones con el FMLN y el advenimiento del comunismo al país. Pero estos votos 'temerosos' lo que demuestran es que se tomaban en serio las elecciones y que se esperaba mucho de su resultado, al creer que los triunfadores en ellas podrían implantar sus programas y sus decisiones.

Si se desecha el argumento del temor, como argumento decisivo para explicar el gran número de votantes, debe reconocerse que los electores querían algo de las elecciones, querían conseguir algo de ellas. Esto supone en alguna medida una voluntad democrática de participación y de participación a través de los partidos. A esto mismo apunta la intensa campaña propagandística en la que intervinieron miles de simpatizantes, que se afanaban por llevar adelante las candidaturas de los partidos respectivos. Algo semejante debe decirse de los miles de ciudadanos que se ofrecieron como vi



gilantes de las urnas en orden a que no se hiciera fraude contra sus partid-
dos.

Por otro lado, la coherencia entre la primera votación y la segunda muestra una clara decisión por utilizar el mecanismo electoral para llevar adelante sus ideas e intereses políticos. Incluso la fuerte división entre los partidarios de uno y otro de los candidatos finalistas apuntala la tesis de la voluntad democrática, esto es, la voluntad de conseguir con los votos sus propósitos políticos. Pudiera haberse esperado que los que se di bujaban como perdedores hubiesen abandonado la lucha política en favor del voto para desestabilizar la situación e impedir o dificultar la votación. No fue así. Ha de reconocerse que los actos de violencia propiamente electorales, en una situación de habitual violencia tal como la que vive El Sal vador, fueron mínimos. Las elecciones, no en las palabras pero sí en los hechos, fueron fundamentalmente pacíficas. Y esto no fue debido a que los intereses no fueran encontrados ni a que no se esperase nada diferenciado de ellas sino a una actitud premeditada de los partidos y a una actitud madura del electorado. Pueden mostrarse desviaciones de esta línea general, pero no tan numerosas y graves como para juzgarlas anormales. Al contrario, podía parecer anormal en la situación actual el comportamiento generalizado que tanto llamó la atención de los observadores internacionales.

¿Muestra todo esto una arraigada y extensa voluntad democrática? Depende de qué se entienda por esta voluntad democrática.



Algunos piensan que el número de electores y su comportamiento general indican un rechazo de la violencia como método adecuado para resolver los problemas más graves del país. Algunos se atreven a leer los resultados de las elecciones como un rechazo expreso de la violencia de la extrema derecha y de la extrema izquierda, al menos de sus métodos violentos en busca del poder. Tal conclusión sería prematura tomada en bloque. Es cierto, por ejemplo, que en los 651,741 votos de ARENA puede leerse con alguna lógica un rechazo pleno del FMLN y que en los 752,625 del PDC puede leerse con parecida lógica un rechazo de los escuadrones de la muerte y/o de la intransigencia extremista. Pero de estos últimos votos sería exagerado concluir que lo que están queriendo es la aniquilación militar del FMLN, cuando más bien podría concluirse de muchos de ellos una cierta voluntad de diálogo y aun de negociación con el FDR-FMLN. Los datos globales y las encuestas indicarían que una gran parte de la población quiere una solución a los dos mayores problemas del país: la guerra y la crisis económica, y que quieren participar en esa solución al menos por el medio de los votos. También de unos y de otros se puede deducir que una gran parte de la población quiere dar el poder real del país a los políticos, aun a sabidas de que no pueden mucho y de que seguirá pesando sobre ellos el tradicional poder militar.

Pero como sería exagerado ver en las masivas elecciones una especie de valor absoluto, resultado de libres y reflexivas voluntades individuales que han tenido a su disposición todas las opciones deseables y las mejores condiciones para decidir entre ellas, sería también exagerado negarles toda validez democrática. Hace años viene repitiendo el FMLN que ha pasado



la época de los partidos políticos y de las elecciones. El pueblo salvadoreño no lo ha juzgado así en esta ocasión y tampoco en 1982. Y esto a pesar de no haber visto grandes resultados de las elecciones que se tuvieron hace dos años. Los partidos han revivido y una gran parte del pueblo se ha acercado a ellos para que defiendan sus intereses. Apoyados en esta votación tan numerosa, los partidos se aprestan a fortalecerse más, sobre todo viendo que les espera una nueva confrontación a diez meses vista. Las elecciones servirán de poco -enseguida analizaremos este punto con mayor detalle-, pero actualmente son estimadas en bastante por la mayoría. Son muchos los que quieren votar incluso con dificultades y molestias, a veces hasta con cierto peligro. Es un aviso para quienes hacen de las armas y de la fuerza, cualquiera sea la ideología con que lo revistan, el medio supremo de hacerse representantes de la voluntad popular.

3. Análisis de la validez efectiva de las elecciones

La gran cuestión que plantean las elecciones no es de si fueron o no fueron democráticas, cuestión que, como acabamos de ver, no puede responderse simplísticamente. La gran cuestión es de si van a servir para algo efectivo, de si van a servir para empezar a resolver los grandes problemas del país.

Hay quienes piensan que el gran problema del país es a la larga el establecer de una vez por todas una institucionalidad democrática, entendida por tal una sucesión de gobiernos constitucionales elegidos en comicios libres y



no fraudulentos. Los que así piensan ven en estas elecciones de 1984 un paso transcendental. Por primera vez desde 1931 tendríamos un presidente elegido libremente y, además, con mayoría absoluta que representa el mayor n^umero de votos conseguido hasta ahora en el país. Tal apreciación tiene su punto de razón, que no puede desconocerse. Aunque las elecciones no han sido promovidas primariamente dentro del país sino fuera de él, aunque las elecciones se han dado en condiciones francamente imperfectas, aunque en ellas no estaban todas las opciones que se dan de hecho en El Salvador, sin embargo han dado paso a una opción política, apoyada aunque sea como mal menor, según los más pesimistas, por una buena parte de la población. Se tiene así la impresión de contar con un gobierno legítimamente elegido, la impresión de estar en una situación nueva y la convicción de que ahora se va a contar con un fuerte y variado apoyo internacional. Si el proceso continúa y se consolida pudiera verse en este primer paso un avance político cualitativamente nuevo, que pudiera contribuir a la democratización real del país.

Hay quienes piensan, por otra parte, que un problema importante en el país es neutralizar lo más posible el poder de la oligarquía salvadoreña y de sus allegados, de modo que deje de ser la clase económicamente más fuerte la clase políticamente dominante. No basta con que los militares dejen el poder a los civiles mediante una fuerte institucionalidad democrática; es menester que las clases económicas más poderosas dejen también de controlar el poder del estado. Esto habría ocurrido, según los más optimistas, con el triunfo del PDC sobre ARENA. Los que así piensan se apoyan en que



el principal apoyo de ARENA estuvo en la Alianza Productiva que aglutina a toda la gran empresa salvadoreña y que ha estado situada siempre en favor de las posturas económicamente más derechistas y en contra de cualquier me dida reformista; se apoyan también en que el principal apoyo del PDC fue la UPD que aglutina a su vez a fuerzas sindicales y campesinas que son cen tristas, pero que representan una cierta oposición a lo que es la derecha empresarial; se apoyan finalmente en el dramatismo que puso en la campaña ARENA con su slogan "ahora o nunca" para implantarse definitivamente en el poder. Se vive con ello la ilusión de que se ha dado un paso importante en las elecciones, de que se ha demostrado que el poder del capital puede ser derrotado en las urnas, de que por primera vez no ha salido lo que el capital hubiera querido. También aquí puede aceptarse que el argumento tiene una punta de razón, pero sólo una punta, como más tarde veremos. No es absolutamente lo mismo en términos económicos y políticos el que hubie- ra triunfado ARENA en vez del PDC y sí puede hablarse de una confrontación. La cuestión queda abierta, sin embargo, si la disputa se ha dado en lo acci dental más que en lo sustancial, por más que lo accidental pueda tener en este caso alguna importancia, si llega a consolidarse. La oligarquía no ha bría salido favorecida; más aún puede verse en problemas, aunque esto no su ponga en modo alguno que el capitalismo criollo haya salido debilitado tras su parcial derrota política de las últimas elecciones.

Hay también quienes piensan que con ellas El Salvador ha potenciado su imagen internacional pero de tal modo que mientras la parte gubernamen- tal aparece purificada y potenciada en las aguas lustrales de unas eleccio-



nes democráticas, la parte antigubernamental, el FDR-FMLN, aparece como partidario de la violencia y como desprovisto de todo apoyo popular. Las elecciones habrían logrado así dar un severo golpe político a la guerrilla y es to constituiría uno de sus resultados principales. Lo cual sería válido tanto dentro como fuera del país, tanto respecto de la opinión pública nacional como internacional. No puede negarse que esto haya sido así. Ténga se la opinión que se tenga de las elecciones, la imagen que éstas han proyectado favorece notablemente la política norteamericana y su reflejo en la política interior salvadoreña a la para que desfavorece seriamente la política del FDR-FMLN. Es posible que los meses venideros demuestren la ineffectividad democrática de este proceso electoral, pero de momento éste ha cumplido una misión efectiva: justificar mediante una participación masiva de salvadoreños la política programada de antemano para El Salvador. ¿Cómo no ayudar a un gobierno elegido democráticamente y que muestra en sus programas intenciones democráticas progresistas? ¿Cómo, por contra, seguir ayudando al FDR-FMLN que no acepta presentarse a unas elecciones democráticas y que no puede presentar pruebas de un decidido apoyo popular? ¿Cómo no dar inicialmente al menos el beneficio de la duda a un gobierno demócrata-cristiano que promete luchar contra los escuadrones de la muerte y que se ha enfrentado contra la extrema derecha derrotándola en las urnas? Las elecciones, por tanto, habrían favorecido a la parte gubernamental, habrían desfavorecido a la parte antigubernamental y habrían legitimado el proyecto político-militar que para El Salvador tienen los Estados Unidos. Este proyecto ya no aparecería como impuesto ni como favorecedor de un gobierno antidemocrático, antipopular y violador de los derechos humanos, sino como un



gobierno de amplio respaldo popular.

Pero aceptando todos estos resultados efectivos del proceso electoral sigue en pie la pregunta de si las elecciones van a contribuir rápida y eficazmente a la solución de los grandes problemas del país. Contribuirían si dieran a los ganadores un poder real para resolverlos, un poder suficiente para propiciar su solución. ¿Es esto así?

Dícese que las únicas elecciones libres habidas en El Salvador hasta ahora son las presidenciales de 1931 en que fue elegido el ingeniero Arturo Araujo. Aquellas elecciones libres no le dieron poder real. Llegó a la presidencia el 1 de Marzo. Un golpe militar le derrocó el 2 de diciembre del mismo año. Por otra parte el resto de presidentes que ha tenido El Salvador y que han tenido poder real no ha sido en virtud de los votos sino en virtud de ser militares y de ser apoyados irrestrictamente por la Fuerza Armada. Los que tuvieron poder real no tuvieron votos y los que tuvieron votos no tuvieron poder real. Recordar estos precedentes no es cuestión vana, porque apunta el manejo del poder real en el país. Ciertamente hoy no estamos como hace cincuenta años, pero tampoco puede olvidarse que el último levantamiento militar es del 15 de octubre de 1979. ¿Supone, entonces, el 53.59% de los votos que constituyen una parte apreciable del pueblo salvadoreño, garantía de que el poder civil va a ser suficiente como para gobernar realmente al país? La pregunta encierra dos cuestiones distintas: una, la de si el poder civil va a poder contar con el apoyo de los otros poderes fácticos, especialmente el poder de los militares; otra, la



de sí, incluso con un apoyo total, el poder civil actual está en condiciones de resolver la actual crisis de El Salvador o, al menos, de superar de alguna forma algunos de los problemas más urgentes.

Antes de responder a esta cuestión hay que analizar el resultado de las elecciones para poder determinar qué tipo de fuerzas está detrás de los ganadores y qué tipo de fuerzas está contra ellos o simplemente no a su favor.

4.- Análisis de los resultados electorales.

Las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 1984 muestran resultados complementarios. Es, por tanto, erróneo circunscribirse a la segunda para determinar el significado de la votación.

a) El PDC sacó en la primera vuelta 549,727 votos, lo cual constituye el 43.41% de los votos válidos, frente a los 546,218 (40.09% que se le atribuyeron en 1982. El incremento en el % es aquí el significativo, pues seguimos suponiendo que en 1982 los votos fueron proporcionalmente inflados. Mientras el PCN y ARENA tienen un ligerísimo aumento porcentual (0.14 y 0.23 respectivamente), el PDC lo tiene significativo (3.22). Por otra parte el PDC se constituye en partido mayoritario en 11 de los departamentos, el mismo número que en 1982 (pierde la mayoría en La Unión a favor del PCN, pero gana la de Chalatenango en contra de ARENA). Quiere esto decir que aun en departamentos más pobres y más castigados por la guerra sigue teniendo



la mayoría relativa, con excepción de los departamentos de Cuscatlán, Cabañas y La Unión, donde es superado por ARENA en los dos primeros casos y por el PCN en el segundo. En el conjunto de la nación el PDC se muestra, pues, como el partido más poderoso y con más votos a favor tanto en 1982 como en 1984.

El PDC tiene su máximo apoyo en los grandes centros urbanos, sobre todo en el departamento de San Salvador donde obtuvo un 64% de los votos en la primera vuelta. Triunfa con clara diferencia en la capital, Ciudad Delgado, Mexicanos, Soyapango, Ilopango, Apopa; triunfa en Santa Ana, Chalchupá, Metapán, Coatepeque, El Congo y Texistepeque; triunfa en San Miguel; triunfa en Santa Tecla, Quezaltepeque, Ciudad Arce, San Juan Opico, La Libertad, Antiguo Cuscatlán, San Pablo Tacachico, Zaragoza; triunfa en Usulután, Jiquilisco, Puerto El Triunfo; triunfa en Sonsonate, Acajutla, Nahui-zalco; triunfa en La Unión; triunfa en Zacatecoluca, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Pedro Masahuat, Olocuilta; pierde en Chalatenango, pero gana en Nueva Concepción donde hay más votos que en el capital departamental, en La Palma, El Paraíso; en Cojutepeque pierde por pocos votos frente a ARENA así como en San Pedro Perulapán, pero gana en San Rafael Cedros; pierde en Ahuachapán y Atiquizaya, pero gana en San Francisco Menéndez y en Guaymango; gana en San Francisco Gotera y Jocoro; pierde en San Vicente y San Sebastián, aunque gana en Apastepeque; pierde claramente en Sensuntepeque e Ilobasco. En resumen sólo en cinco capitales departamentales es superado el PDC, pero en las capitales más habitadas y en los centros urbanos más densamente poblados triunfa el PDC. En los centros menos poblados y/o menos desarrollados económica y políticamente y/o en zonas conflictivas, la



implantación del PDC es por lo general menor. Hay que recordar que esto no es de ahora, pues, por ejemplo, la alcaldía de San Salvador ha sido ganada tradicionalmente por el PDC. Hay que subrayar asimismo que en esas mismas ciudades y centros urbanos se dan asimismo muchos votos no afectos al PDC, como se demostró en la segunda vuelta, al juntarse en algunas de ellas los votos de ARENA y PCN.

Si tomamos la primera vuelta como la indicadora real de las preferencias de los votantes, ya que tenían más opciones entre las que elegir, pue de decirse que el PDC cuenta actualmente con 549,727 votantes que le son positivamente afectos, lo cual representa un 43.4% de los votos válidos. Votantes menos positivamente afectos al PDC pueden considerarse los pocos más de 200,000 votos que se le añadieron en la segunda vuelta, pues proceden de una segunda opción y muchos de ellos pueden leerse más contra ARENA que en favor del PDC. Por otro lado los 366,917 votos de ARENA en la primera vuelta (29.76%) y aun el total de 651,741 (46.40%) de la segunda deben considerarse como positivamente contrarios al PDC.

Si atendemos no a los votos sino a las organizaciones que se declararon públicamente a favor del PDC, encontramos los claros testimonios de la UPD y del "Comité permanente por la paz, la democracia y la justicia social". Con la UPD que agrupa organizaciones campesinas y obreras de alguna importancia cuantitativa el PDC llegó a un pacto social, que se reflejará no sólo en algunas medidas reformistas sino incluso en participación de sus miembros en algunos puestos importantes de la administración estatal. Ya después de las segundas elecciones el PDC y AD llegaron a un cier



to pacto político, que muestra cómo puede haber coincidencias y alianza en tre los dos partidos. A AD, como es sabido, le respaldan sobre todo secto res urbanos medios y profesionales.

b) ARENA sacó en la primera vuelta 376,917 votos (29.76%) lo cual su pone una disminución respecto de los votos que se le atribuyeron en 1982 en 25,387. Si este dato lo comparamos con el aumento tenido por el PDC, hay que hablar de un fracaso de ARENA. Su fulgurante ascensión en las elecciones de 1982 habría quedado frenada al menos momentáneamente en 1984; su paso por el poder en la Asamblea y en algunos ministerios claves y alcal días no le habrían servido para avanzar. Punto tanto más de considerar cuanto que su campaña contó con todos los respaldos de la empresa privada y con el apoyo de los medios de comunicación. No obstante hay que recono- cer que son muchos votos y que, sobre todo, son votos más beligerantes y ac tivos que los del PDC.

Los votos de ARENA son claramente los votos de las clases altas y me- dias altas junto con los votos de las clases más bajas sobre todo en las zo nas rurales. Que lo sean los de las clases altas y medias altas no sorpren- de en absoluto porque es el partido que las representa y que ha surgido di- rectamente de sus intereses y de sus temores. Que lo sean los de las cla- ses bajas rurales sólo en un primer momento puede sorprender: ha sido habi- tual en el país, y lo es en muchos países, que las masas rurales no concien- tizadas voten por partidos de derecha; un menor grado de concientización po lítica entre los sectores menos favorecidos posibilita el voto en favor de



posiciones más derechistas; en situaciones de fuerte crisis se polarizan los sectores y se amplían las posiciones de extrema derecha; en los lugares en que se sienten más los efectos de la guerra y de la estrategia anti-insurgente las posiciones radicales contra el FMLN tienen un mejor caldo de cultivo; todavía quedan en el campo el efecto producido durante años por la labor anti-progresista y falsamente nacionalista de ORDEN y/o de la defensa civil y patrullas cantonales; la presencia de la Fuerza Armada en los operativos facilita el que algunos de sus jefes y oficiales sigan prácticas antiguas en favor de los partidos que han sido habitualmente de su preferencia y que parecen defender a ultranza las conductas de los militares; el sector rural está más cerca de la autoridad militar y de quien le proporciona trabajo inmediato y es más sensible a sus presiones; en las poblaciones pequeñas es más fácil la intimidación. Por todo ello, aunque el fenómeno pueda parecer llamativo, no es en sí extraño ni tampoco es del todo significativo. Es presumible que a medida que la población se acerque a los niveles y ambientes de las zonas urbanas, en la medida en que aumente la conciencia política, irán disminuyendo los votos por ARENA o ARENA tendrá que cambiar de imagen.

Porque los votos de ARENA son los de la primera vuelta y no los de la segunda. En la segunda vuelta donde este partido sumó más votos nuevos que el PDC (274,824 de ARENA por 202,898) del PDC, es claro que votaron por ARENA muchos votantes cuya fidelidad primera es por otros partidos, especialmente por el PCN. ARENA ha capitalizado propagandísticamente el resultado de la segunda vuelta que en parte oscurece su fracaso en la primera. Pero el



que los votos que tomó de los otros partidos sean contra el PDC no significa que sean en favor suyo. Lo sería, si no estuviera el PCN en liza, pero el PCN está lejos de desaparecer, pues más bien se ha consolidado después de las crisis naturales que ha tenido que pasar.

La base principal de ARENA no son los votos, aunque cuenta con partidarios muy activos y con una organización sólida. La base principal está en la empresa privada y en sus organizaciones profesionales. Así la Alianza Productiva y sus organizaciones filiales, a pesar de su confesado carácter puramente gremialista, no dudaron en poner su infraestructura organizativa y la de algunas de las empresas a favor de este partido. Más aún, hicieron declaración pública de la necesidad de votar a favor de ARENA y en contra del PDC para evitar el totalitarismo izquierdista.

c) El PCN se consolidó como la tercera fuerza política del país en unos niveles muy significativos. En las elecciones de 1982 se le atribuyeron 261,153 y en las de 1984 tuvo 244,556, que representa un 19.31%. El PCN viene de una situación de desprestigio que dió paso al golpe de octubre de 1979; esta situación parece haber sido superada, al dejar de ser partido oficialista, de modo que sus votos actuales deben ser considerados como del partido y no como de los que se quieren aprovechar del partido. Por otro lado, los 15,430 votos ridículos de PAISA, el sector segregado del partido, supone un triunfo evidente de las posiciones asumidas por el aparato y la dirección del PCN actual. Los diputados que se separaron del PCN para formar PAISA carecen de bases reales y de consistencia, como lo demostraron en su apoyo a ARENA. Pasada la crisis, el PCN, lejos de debilitarse puede



afianzarse más e incluso puede pasar a constituirse en decisivo dentro de la Asamblea, después de las elecciones de diputados que habrán de tenerse en los primeros meses de 1985.

Fue significativo, sin embargo, que la dirección del PCN no quisiera inclinarse en la segunda vuelta ni por ARENA ni por el PDC, mientras que sus partidarios se inclinaron más por ARENA que por el PDC. En esto más que ver una inclinación hacia programas y comportamientos de derecha, ha de verse el efecto de una lucha contra el PDC durante más de veinte años. El voto del PCN que se fue con ARENA no es tanto voto contra el programa reformista del PDC sino contra el partido rival, con cuya organización se ha estado en lucha propagandística en muchas elecciones anteriores.

d) AD, partido nuevo moderadamente progresista, no alcanzó buenos resultados en estas elecciones. Sobre los 100,586 votos que se le atribuyeron en 1982 perdió 56,586 bajando su porcentaje del 7.38% al 3.46%. Fue el mayor perdedor de las elecciones. Esto se puede explicar en parte porque ya en la primera ronda sus simpatizantes buscaron el voto útil, que castigara a ARENA y de rebote apoyara al PDC. Pero esta explicación podría ser insatisfactoria y, entonces, habría que concluir que su mensaje no tiene de momento cabida en el tenso y disputado campo político salvadoreño. Habrá que esperar a las elecciones de 1985 para sacar conclusiones más comprobadas.

Nos encontramos, pues, con un electorado fuertemente dividido. Los dos partidos que quedaron para la segunda vuelta representaban los dos ex-



tremos en disputa. Los votantes no se decidieron por partidos intermedios PCN y AD, sino por cada uno de los partidos más opuestos, PDC y ARENA. Lo que divide al electorado parecería que pudiera concretarse en estos puntos:

- 1) Preferencia por un capitalismo moderado o por un capitalismo extremo;
- 2) guerra controlada contra el FMLN-FDR o guerra total; 3) término de la actividad de los escuadrones de la muerte y de otras violaciones de los derechos humanos o favorecimiento de todo aquello que lleve a terminar con la subversión sea cual sea su modalidad; 4) apertura a algunas formas de diálogo con el FDR-FMLN o rechazo absoluto; 5) una cierta apertura política y social o restricciones de todo tipo a las fuerzas y movimientos progresistas; 6) relaciones internacionales abierta o rechazo de toda relación políticas -las económicas responden a otros intereses- con países considerados como socialistas.

Esta división del electorado que será mantenida fuertemente por ARENA como partido opositor hará difícil la gestión del PDC, como luego insistiremos más detenidamente, pero por otro lado traerá la ventaja de enmarcar más o menos democráticamente la lucha política. Puede preverse, efectivamente, un incremento en la actividad política de los partidos, lo cual a la larga puede traer efectos bastante profundos y duraderos para el desarrollo político y social del país.

La división del electorado puede traer sus consecuencias en orden a futuras alianzas. Si no aparecen partidos más a la izquierda del PDC, puede considerarse la posibilidad de un centro democrático que pudiera acercarse



al 65% del electorado, si se llega a una política de alianzas entre el PDC, el PCN y AD. AD y PDC ya la han iniciado de algún modo, mientras que PCN se mantiene a la expectativa en razón fundamentalmente de conservar su clientela tradicional propia para los comicios de 1985 (alcaldes y diputados). Pero es posible que una inteligente política de alianzas pudiera llegar a reducir a ARENA a límites políticos muy reducidos, lo cual no necesariamente sería una ventaja para el proceso democrático. En la otra hipótesis de que saliera un partido más a la izquierda que el PDC, al cual no sería exagerado atribuir en un primer momento posibilidades reales en torno al 20% del electorado, las cosas podrían cambiar. Este hecho supondría una pérdida de votos en el PDC en mayor o menor cantidad según el grado de izquierdismo y de organización del hipotético partido, aunque tal vez su mayor clientela estaría entre los que pudieron votar y no votaron (400,000 ?) y los que votaron abstención o anularon su voto (32,582 + 81017 = 113,599). No significa esto que acapararían todos estos votos, pero sí que queda abierta una posibilidad de cambio del mapa político de El Salvador. Efectivamente esto podría llevar a alianzas del PDC con el nuevo partido -experiencias de 1972 y 1977- lo que probablemente llevaría a que el PCN se distanciase todavía más.

En las elecciones de 1982 todos los partidos se coaligaron contra el PDC, lo cual catapultó a ARENA hacia un mayor poder que sólo pudo ser limitado por la acción contraria de Estados Unidos. Las cosas parecen haber cambiado, al menos por lo que toca a los electores e incluso por lo que to



ca a los partidos. El PCN no dió su voto a ARENA, mientras que AD se lo dió al PDC. El paulatino cambio de la política norteamericana y la muestra de su clara preferencia por el PDC han logrado que cambie también la posición de los partidos. Un cierto realismo político ha acabado por imponerse. Esto no quiere decir que las disputas no vayan a presentarse te niendo en cuenta la proximidad de las siguientes elecciones, por razón de las cuales AD y PCN mirarán muy cuidadosamente cuál deba ser su actuación para no perder votos y, a ser posible, aumentarlos. Las últimas elecciones habrían mostrado a los partidos que es posible aumentar los votos sin recurrir, como en otras ocasiones, al fraude y a la imposición oficial. Esto, como lo venimos repitiendo, aumentará la actividad política de los partidos y dará otro clima a la vida política del país.

5.- El revés político infligido por las elecciones al

FDR-FMLN

Los promotores y organizadores de las elecciones querían con ellas asestar un golpe político al FDR-FMLN como parte de una estrategia que tiene por objetivo su eliminación. No sólo se pretendía con las elecciones el facilitar la ayuda y la intervención militar norteamericana como condición indispensable para sacar ventaja en la lucha armada, sino que se pretendía también debilitar al FMLN-FDR quitándole credibilidad política tanto dentro como fuera del país. Si se lograba una votación masiva, si se daba la imagen de unas elecciones democráticas en las que libremente participara la mayor parte del registro electoral, podría concluirse



que el FMLN-FDR carecían de apoyo popular, cuando no que contaban con la oposición y el rechazo de la mayoría del pueblo salvadoreño. Los observadores norteamericanos y los de otros muchos países democráticos podían hablar de una "overwhelming repudiation" de la guerrilla, de un rechazo masivo y aplastante de la guerrilla. Esta ya no podría apelar a que las grandes masas están con ella ni que su lucha es contra un gobierno impuesto a la fuerza y rechazado por la mayoría del pueblo salvadoreño.

No hay duda de que por el momento y por lo que toca a la imagen que observadores y periodistas han dado del proceso electoral y del pueblo salvadoreño, esto se ha conseguido. Los efectos inmediatos de este cambio de imagen pueden verse en el súbito cambio del Congreso de Estados Unidos que ya se siente democráticamente respaldado por el pueblo salvadoreño en su ayuda contra la infiltración comunista en el área centroamericana. De poco sirve decir que se trata sólo de cuestión de imagen. Era una imagen nueva la que se necesitaba y ésta la han dado con creces las elecciones. Ciertamente ha habido observadores que insisten en la imposibilidad de que el FDR-FMLN se presentara a las elecciones, concluyendo de este hecho una limitación seria del proceso electoral; pero esos mismos observadores sostienen que eso no obstante una gran parte del pueblo acudió a las urnas y eligió con suficiente libertad y garantía a sus gobernantes.

Pero el problema no es sólo de imagen ni es tampoco de algo que vaya a durar poco. Realmente algo nuevo está ocurriendo en el pueblo salvadoreño, de modo que puede hablarse de dinamismos nuevos. Todavía las elecciones de 1982 dejaron bastantes dudas dentro y fuera del país. Pero las de



1984, aunque tuvieron características no muy distintas a las de 1982, se tuvieron dentro de un proceso que ha avanzado en diversos puntos importantes. Si aquellas elecciones no trajeron resultados espectaculares, tampoco trajo estos resultados la lucha militar y mucho menos se vió en estos años la posibilidad de que las negociaciones tuvieran lugar. Las elecciones, por otra parte, son menos costosas que la guerra y son vistas como más razonables por el ciudadano de a pie, profundamente influido por una intensa campaña propagandística. A la mayor parte de la población salvadoreña que no le es posible participar en la guerra ni en la negociación, no le queda sino participar socialmente en luchas reivindicativas y políticamente en las contiendas electorales. Los partidos, por su parte, pusieron en marcha sus propias maquinarias organizativas y propagandísticas, logrando así incidir bastante en el conjunto de la ciudadanía. La imagen proyectada por otros fue introyectada por los ciudadanos hasta el punto de hacerles pensar que querían las elecciones y que las elecciones algún bien iban a traer. La impresión esparcida por las zonas del país no controladas por la guerrilla o en las que la lucha no se hace muy presente y que son donde vive la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño es, por un lado, que la situación va mejorando en lo que toca a la violación de los derechos humanos y, por otro lado, que muchos de los males que afectan al país son producto de la guerra, con la que, por tanto, hay que terminar cuanto antes; más aún se ha creado la ilusión de que un gobierno elegido democráticamente y fuertemente respaldado por Estados Unidos pueden traer beneficios tangibles en poco tiempo.



Ya las elecciones de 1982 supusieron un golpe político importante a la guerrilla, agravado por su actitud equivocada ante las mismas. El pueblo fue bombardeado con una intensa propaganda que sin duda comenzó a causar efecto; los partidos fueron cohesionando otra vez a sus correligionarios. Es cierto que casi nada importante cambió en la realidad salvadoreña, pero sí cambió bastante la conciencia de los salvadoreños. El FDR-FMLN apenas cuenta con la capacidad de acercarse a la conciencia de la mayoría de los salvadoreños; sus mensajes apenas llegan y cuando llegan físicamente no pare cen llegar de modo que puedan ser acogidos. Han pasado ya cuatro años desde que el FMLN se hacía presente políticamente en San Salvador y en casi toda la república; han desaparecido casi cuarenta mil personas que eran al menos simpatizantes, cuando no organizados; han huido del país cerca de 700,000 personas, muchas de las cuales estaban en relación con los movimientos revolucionarios; los mejores activistas que trabajaban con las masas o murieron o fueron reclamados para las tareas militares. Este proceso de depauperación del movimiento revolucionario de masas que ya empezó en 1981 se ha con tinuado en los años siguientes. Hoy la memoria es ya lejana y el cansancio grande; la ilusión de un cambio rápido de la situación se va apagando. En estas circunstancias no se puede mantener el mismo estilo de acercamiento a los problemas.

¿Se percata el FDR-FMLN del incesante cambio de la conciencia del pueblo salvadoreño? ¿Se percata de cómo va cambiando el ambiente? ¿Mide, por ejemplo, lo que significa el cambio de ARENA en su acercamiento práctico a los problemas del país? Suele decirse que en El Salvador hay dos realidades:



la realidad de la guerra que es vivida por muy pocos y la realidad de todos los días que es vivida por la inmensa mayoría. Puede sustentarse razonablemente que la verdadera y decisiva realidad es en la actual coyuntura la guerra, pero esto no significa que ésta sea la realidad vivida por la mayoría del pueblo. Las encuestas dan que la mayor parte de la población, que no vive en zonas conflictivas, siente que el problema fundamental es el problema económico y no el problema de la guerra o de la violencia. La crisis económica les afecta día a día; la guerra sólo de lejos y de oídas. Tiene, entonces, razón el FDR-FMLN cuando insiste en que no han cambiado mucho las cosas, porque no ha cambiado mucho la guerra y, si ha cambiado, ha sido a su favor; pero no la tiene, cuando no se percata de que ha cambiado el clima político y de que ha cambiado profundamente la percepción que tienen de la situación las mayorías salvadoreñas, incluidas las más necesitadas. Es el resultado de la prolongación del conflicto, de la falta de concientización y de la incesante propaganda que se hace en sentido contrario.

El FDR-FMLN no puede ser víctima de su propia propaganda desconociendo el significado de más de millón y medio de votos. Ciertamente la verdad de las elecciones no se verá más que después de seis meses, pero el que haya millón y medio de votos salvadoreños en favor de posiciones políticas que no son las del FDR-FMLN es un hecho que exige reflexión. Y la reflexión primera debe arrancar de la constatación de que el FDR-FMLN vive muy lejos de la realidad vivida por la mayor parte de la población; debe continuar investigando cuál es la mejor forma de acercarse a la conciencia de la mayoría nacional, a



la que hoy no tiene acceso; debe concluir tomando medidas para superar el hiatto que le separa de su pueblo. Por muy necesaria que le pueda parecer la guerra no puede desconocer lo necesario que es también la política. Y si de momento no puede hacer mucho en favor de esta al interior del país, no por eso sería sensato concluir que no merece la pena intentarlo e intentarlo creativamente. Las circunstancias de 1984 no son las mismas que las de 1975-1980; por ello las acciones políticas no pueden ser las mismas, pero las antiguas deberían ser sustituidas por otras que se acomodaran mejor a la situación actual.

El FDR-FMLN sigue pensando que la vía correcta para conseguir sus objetivos es la de acrecentar la lucha militar hasta conseguir una negociación en condiciones favorables. Todavía no se ha demostrado que esa vía sea para ellos ineficaz o equivocada. Militarmente su situación es sólida hasta el punto de que la administración Reagan repita que, sin una creciente ayuda, no sólo no pueden ser derrotados, pero ni siquiera contenidos. Por otro lado, su oferta negociadora parece estar más cerca del espíritu y de la letra de Contadora que la propuesta de Kissinger y la estrategia de Reagan. Pero el FDR-FMLN no puede dejar de ver que su estrategia no ha conseguido todavía resultados decisivos y que su estrategia tampoco ha captado la atención y la voluntad de la mayor parte de los salvadoreños. Esto es lo que debe obligarles a replantear su estrategia de cara al futuro. ¿Cuánto más habrá de continuar la guerra para conseguir la negociación? ¿Hasta cuándo podrán mantener su crecimiento militar, si es que aumenta el cerco, disminuye el apoyo internacional y empieza a cundir el cansancio, el desánimo y aun la oposición entre las masas salvadoreñas?



Es posible que tras el primer año del próximo gobierno se haga válido el vaticinio del FDR-FMLN de que nada sustancial habrá cambiado, de que la guerra seguirá más fuerte que lo que está actualmente y de que, consiguientemente, todo lo demás no tendrá solución estable. Pero puede haber medidas que poco a poco vayan minando dentro y fuera del país el apoyo a la guerrilla. Si a esto se junta que la victoria militar del FMLN se hace cada vez más improbable, las dificultades aumentan. Pero, aunque esto no ocurriera, es necesario para el FDR-FMLN aumentar su número de simpatizantes, que tal vez potencialmente sean muchos, como lo fueron en el pasado, pero que actualmente no lo son tantos. Sin un masivo apoyo interior es improbable que la fuerza de las armas le sea suficiente. Las elecciones recién pasadas han demostrado el sentir actual de muchísimos salvadoreños y, a su vez, han supuesto un distanciamiento político de los métodos y aun de los objetivos del FDR-FMLN. Sus contrarios han tomado la iniciativa en un terreno que no le era favorable, pero ese terreno es el terreno nacional y quien quiera jugar con ventaja en él debe hacerse presente de modo apropiado.

Es, por otra parte, evidente que respecto del problema fundamental del país, el FDR-FMLN cuenta con mayor fuerza que cualquiera de los partidos que se han presentado en las elecciones y aun que todos juntos. Respecto de la guerra los políticos tienen poco que hacer y el FMLN puede hacerlo casi todo. La estrategia político-militar del FDR-FMLN le proporciona un poder y una fuerza que no tienen los partidos políticos; juntos todos ellos y sirviéndose de todo el poder del estado, probablemente no podrían contrarrestar por sí solos la fuerza del FDR-FMLN. Este es un dato importante que no puede simplificar-



se diciendo que se trataría del triunfo de las armas contra los votos, pues también las fuerzas gubernamentales tienen armas y poderes coercitivos, superiores incluso en cantidad y calidad a los que pueda disponer el FMLN. Esto, a su vez, demuestra la debilidad del proceso electoral en las actuales circunstancias y el limitado carácter de revés político que este proceso haya podido suponer al FDR-FMLN. Pero por débil que sea el proceso electoral y por limitado que sea el revés, no sería realista cerrar los ojos para decir que nada sustancial ha cambiado, que nada importante ha sucedido. Los incessantes cambios pequeños orientados en un mismo sentido acaban produciendo cambios importantes; el tiempo transcurrido no es una formalidad vacía que sólo sirve para contar en qué fecha estamos. Al contrario los cambios incessantes y el tiempo transcurrido están originando una nueva etapa, cuyo signo inicial es la subida al poder de Duarte y del partido demócrata cristiano, tras casi veinticinco años de lucha política, casi todos ellos en la oposición. Paradójicamente ha sido la guerrilla por la respuesta que a ella está dando Estados Unidos quien ha impulsado a los democristianos al poder. La historia tiene su lógica interna, por más que no siempre sea una lógica calculable de antemano.

Tras las elecciones el FDR-FMLN seguirá con su estrategia general de guerra y oferta de negociación. Pero quizá las elecciones han comenzado a demostrar que esa estrategia no es suficiente, que necesita acercarse a ese millón y medio de salvadoreños, cuyos votos no dan un gran poder inmediato, pero sin los que no es posible un cambio democrático. El hecho reciente de la necesidad creciente de un reclutamiento forzado por parte del FMLN, que



le deja en parecidas condiciones al de la Fuerza Armada, salvadas las diferencias, indica hasta qué punto ya no hay respaldo popular suficiente para mantener y engrosar sus filas con voluntarios. La prolongación de la guerra, la huida masiva de sus simpatizantes fuera del país, el terror causado por más de 40,000 asesinatos, la concentración en la guerra y no en el trabajo de masas, el apaciguamiento de las subjetividades revolucionarias, todo ello hace que el FDR-FMLN se encuentre hoy en circunstancias nuevas. Sus enemigos han avanzado mucho en distintas líneas y una de ellas en la apertura política, para la cual el FDR-FMLN no tienen todavía respuesta. La oferta de negociación lo es en alguna medida, pero sus efectos políticos no se dejan sentir entre la gran mayoría del pueblo salvadoreño.

6. Posibilidades abiertas por el proceso electoral

Hay un enorme desproporción entre la apariencia del proceso electoral y el poder real que ese proceso genera. Parecería que un triunfo claro en un proceso electoral limpio sería suficiente para contar con todo el poder estatal disponible y con todo el poder suficiente para afrontar eficazmente los grandes problemas del país. Un somero análisis de la realidad salvadoreña muestra que esto no es así.

Las circunstancias objetivas del país hacen que los grandes problemas reales en que se debate sobrepasen el ámbito de poder de un presidente civil en El Salvador. Efectivamente, la situación de guerra y el interés decisivo puesto en la guerra por Estados Unidos hacen que todo lo que se pretenda ha-



cer quede sobredeterminado por los intereses norteamericanos y también por el poder especial que sobreañade la situación de guerra al que ya es consuetudinario en la Fuerza Armada. Por otro lado, los intereses geopolíticos que están en juego en el área centroamericana y la especial situación económica, política y militar en que se debate, hacen que el campo de autonomía del poder civil de una nación como El Salvador sea mínimo; la interdependencia sobredeterminada por los intereses norteamericanos y por el peligro real o fingido de una presencia soviética hacen que poco se pueda hacer no sólo hacia afuera sino incluso hacia adentro. En tercer lugar, la fuerza de la empresa privada, en principio enemiga de los vencedores de la contienda electoral, es de por sí grande y será mayor en cuanto se la solicite su positiva contribución al desarrollo económico del país, sin el que los problemas políticos y sociales podrían agravarse hasta límites insoportables. En cuarto lugar, el subdesarrollo, desorganización, desmoralización e ineficacia del aparato administrativo del Estado, que afecta a todo él, que afecta al poder judicial, a los cuerpos de seguridad, a los empleados públicos, hacen especialmente difícil cualquier proceso efectivo de desarrollo y de democratización. En quinto lugar, la fuerza creciente del FMLN en lo militar, su renovada capacidad de movilización sindical, su necesidad de mostrar su poder en distintas clases de acciones que pueden ir de ofensivas más o menos amplias hasta campañas de sabotaje y de desestabilización, junto todo esto con los límites que Estados Unidos y la Fuerza Armada ponen al poder civil para entrar en diálogo y negociación, reduplican la dificultad de gobierno no sólo por lo que el FMLN haga sino por el poder que su acción va produciendo en la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad y grupos paramilitares.



No obstante estas tremendas dificultades y limitaciones se dan también algunas potencialidades, que surgen de algunos apoyos más o menos seguros.

El apoyo fundamental y decisivo está en Estados Unidos que, al menos de momento, necesita para la implementación de sus planes en El Salvador de un gobierno civil de las características del que ha llegado al poder tras las elecciones. En cuanto este apoyo es exterior al poder civil es una limitación, pero en cuanto este apoyo es una necesidad también para Estados Unidos, es una arma que puede ser utilizada por el gobierno salvadoreño; si la extrema derecha pudo hacer su política terrorista, confiada en que la ayuda norteamericana no podía faltar pues se daba en interés de Estados Unidos, con mayor razón podrá un gobierno civil democrático confiar en esa ayuda sin tener que someterse ciento por ciento a las directrices de Washington. Estados Unidos necesita una imagen democrática en El Salvador para conseguir que el Congreso le proporcione la ayuda necesaria; el gobierno salvadoreño puede jugar con esta necesidad y con la urgencia de que se conserve su imagen democrática para conseguir un mayor campo de decisión política. Habrá límites intraspasables, pero esos límites podrían tal vez ser ampliados. De todos modos puede contarse con suficiente apoyo norteamericano para asegurar que no habrá golpe militar, que no habrá triunfo militar del FMLN, que no habrá colapso económico, que podrá mantenerse la apariencia reformista, que podrán controlarse mejor las acciones de los escuadrones de la muerte.

En segundo lugar esta la Fuerza Armada. Ha habido en ella un cambio paulatino después de que fracasara el intento de cambio pretendido por la



juventud militar en 1979. Este cambio se debe fundamentalmente a la marcha de la guerra. Cuando la guerra pareció necesitar violencia contra la población civil, esa violencia fue sistemáticamente cultivada. Hoy que la administración Reagan necesita una nueva imagen van cambiando las tácticas violadoras de los derechos humanos. La dependencia de la Fuerza Armada con Estados Unidos es tal en recursos y asesores que no es presumible una rebelión de los militares contra las directrices de los norteamericanos. La Fuerza Armada depende hoy cada vez más de Estados Unidos que de la oligarquía, la Fuerza Armada va dejando de estar subordinada principalmente a los intereses de la gran empresa privada para estar subordinada a Estados Unidos, ya que en la actualidad el problema principal es la guerra y para la guerra es mucho más decisivo el apoyo de Estados Unidos que el del capital salvadoreño. Al plegarse, pues, la Fuerza Armada a la política norteamericana y al incluir ésta un claro apoyo al nuevo gobierno, puede esperarse que este apoyo sea prestado también por el ejército.

La Fuerza Armada ya no se presenta en favor de ARENA y aunque no se presenta tampoco en favor de la Democracia Cristiana, es de esperar que se presente en favor del Gobierno. En estas circunstancias no es de esperar que la Fuerza Armada ponga dificultades a las reformas y a la conducción política del país, excepción hecha del problema de la negociación. Pero, por otro lado, la Fuerza Armada no permitirá que se la debilite; no permitirá investigaciones sobre su presunta participación en la violación de los derechos humanos, aunque podrá permitir que se establezca una mayor vigilancia para que no se repitan acciones pasadas; no permitirá tampoco la pérdida



drástica de sus privilegios fácticos ni la pérdida de su participación en los asuntos nacionales. La repetición en el nuevo gobierno de los mismos mandos militares con pequeñas excepciones, aunque notorias, en razón de acusaciones en cuestión de derechos humanos y/o en razón de claras simpatías por ARENA, muestra de momento cuáles son las posibilidades del nuevo gobierno.

En tercer lugar, está el apoyo del triunfo electoral. Se trata en este caso de un apoyo sobre todo legal y moral, pero no por eso ineffectivo. Hay una cierta conciencia colectiva de que un gobierno elegido democráticamente deba poder mandar democráticamente. Es algo. Las fuerzas opuestas al gobierno así elegido, apoyadas claramente por la mayor parte de los medios de comunicación, no tienen tan fácil el empujar a sus lectores contra quienes fueron elegidos libre y mayoritariamente. El partido derrotado en la segunda vuelta está preparando su actuación dentro de la lucha política afirmando que triunfó por un 52% y que su triunfo le fue arrebatado en el escrutinio. Bien sabe que no es así, pero planteada de ese modo la cuestión puede lanzarse a una actividad política más crítica contra un gobierno que según ellos ha accedido fraudulentamente al poder. Pero tanto la opinión nacional como la internacional están claras de que no hubo fraude, de que debe ser respetado un gobierno que ha sido elegido democráticamente.

En cuarto lugar, está el deseo mayoritario de que se haga algo desde el gobierno y, consiguientemente, de que se deje actuar al gobierno en busca de soluciones. No es mucho lo que la opinión pública y la voluntad de los ciudadanos puede lograr en El Salvador, como lo demuestran las anteriores



elecciones fraudulentas de 1972 y 1977. Pero algo así pueden lograr. De hecho se va sintiendo otro ambiente político del que no es factor determinante la opinión y la voluntad de los ciudadanos, pero al que ambas contribuyen. El hecho de que vaya a haber un importante proceso electoral dentro de diez meses hace más efectiva esta opinión y voluntad que pueden sancionar un éxito o un fracaso en las elecciones de diputados y de alcaldes. Esto va a impulsar a que se tomen medidas nuevas y a que ninguno de los partidos dificulte aquellas cosas, cuyo fracaso puede suponerles la pérdida absoluta o relativa en las próximas elecciones. Estamos en un momento de alza de la voluntad popular de participación política y ya no serán sólo los sectores empresariales los que fuercen medidas favorables para ellos sino también los sectores laborales a través de huelgas y/o manifestaciones de su opinión.

En quinto lugar está el cambio de imagen internacional. Los distintos gobiernos de El Salvador desde 1980 hasta 1984 han sufrido las reservas cuando no la manifiesta oposición de muchos gobiernos democráticos, a pesar del esfuerzo en contra hecho por Estados Unidos. Esto está cambiando y va a cambiar con el acceso a la presidencia de un gobernante elegido libremente por la mayor parte de los votantes. Empieza, pues, el nuevo gobierno con un crédito fuerte a su favor, que si sabe administrarlo puede prolongarse por los cinco años de su posible mandato. Varios países fuertes y no sólo los gobernados por la democracia cristiana cambiarán su actitud respecto del gobierno de El Salvador y correspondiente respecto del FDR-FMLN. En este sentido no es de despreciar la felicitación de la Internacional socialista al nuevo mandatario ni la presencia de numerosas representaciones de perfil no bajo enviadas a la





toma de posesión. Este nuevo apoyo no sólo favorecerá algunas acciones del nuevo gobierno, sino que puede contrarrestar en alguna pequeña medida el influjo de la administración Reagan.

6. Limitadas perspectivas del gobierno demócrata-cristiano

Piensan algunos que con la llegada al gobierno de la nación del partido demócrata-cristiano y del primer presidente civil constitucional en muchísimos años se ha entrado en una etapa fundamentalmente nueva, cuyos resultados se verán paulatinamente. Las apariencias son, en efecto, de una etapa fundamentalmente nueva, pero los pronósticos a corto plazo no pueden ser muy optimistas. La razón es que tras las apariencias de una etapa fundamentalmente nueva no se da ni se puede dar nada radicalmente nuevo. Más radical fue el corte del 15 de octubre de 1979 y tras él ocurrieron cosas realmente nuevas, que profundizaron y agravaron la crisis del país. Los cambios actuales, aunque por su apariencia formal cierran esa etapa, en realidad no la cierran, porque la crisis fundamental sigue siendo la misma y sus agentes principales siguen siendo los mismos sin darse cambios significativos en lo esencial. Esto no quiere decir que el proceso se haya detenido ni que la continuación del proceso no pueda llevar a situaciones que serán realmente muy distintas y distantes de las actuales; quiere tan sólo decir que el paso de un régimen de excepción a un régimen constitucional, el paso de un gobierno de elección indirecta a un gobierno elegido directamente no suponen en el caso de El Salvador un cambio real fundamental.

Analicemos brevemente las razones del pesimismo para después apuntas



algunos campos donde una mejora del proceso es imaginable.

La crisis nacional, cuya expresión máxima es el conflicto armado, no mejorará en nada durante los próximos meses, antes empeorará por el incremento y el endurecimiento de las acciones bélicas, no excluidas las para-bélicas, aunque éstas sean menos probables. Ciertamente la guerra no es todo en el país ni es percibida como tal por la mayor parte de la población; pero es el elemento determinante. Sigue habiendo una confrontación total entre la parte gubernamental y la parte anti-gubernamental y esa confrontación busca en principio la victoria. En esa confrontación es donde se presenta la verdadera lucha por el poder y aun la orientación político-social-económico-internacional fundamental del país. Pues bien esta crisis principal, lejos de resolverse, empeorará y este empeoramiento afectará al resto de la vida nacional.

Efectivamente, tanto Estados Unidos como el FMLN tienen en sus planes proseguir y acrecentar la guerra en busca de no ser derrotados y, lo que es más grave, en busca de fortalecerse para derrotar al contrario o llevarle a una posición claramente desventajosa. Así el FMLN puede alcanzar en los próximos meses, si no lo ha hecho ya, un número de diez o doce mil estrictos y bien armados combatientes; Estados Unidos por su parte intenta cuadruplicar o quintuplicar su ayuda militar y cambiar cualitativamente su táctica. Duarte acaba de anunciar en Estados Unidos que la Fuerza Armada salvadoreña utiliza ciento cincuenta mil proyectiles diarios, lo cual muestra gráficamente la terrible extensión de la guerra. El Pentágono está armado sistemáticamente a Honduras y ha logrado organizar maniobras conjuntas de los tres ejércitos, al norteamericano, hondureño y salvadoreño, a pocos kilómetros de la frontera



salvadoreña. Los vuelos de reconocimiento y vigilancia sobre territorio salvadoreño son ya habituales por parte de aviones norteamericanos, piloteados por norteamericanos.

Asimismo puede presumirse un aumento de acciones para-militares. En primer lugar, estas acciones no han desaparecido, a pesar de las campañas publicitarias contra los escuadrones de la muerte por parte de Estados Unidos y de la Fuerza Armada. El número de asesinados y desaparecidos por razones políticas que descendió sensiblemente del período 1980-1982 a 1983^{no descendió ni en 1983} ni en 1984 de modo apreciable y en algunos períodos comparables ha aumentado. ¿Por qué va a cambiar notoriamente en los próximos meses? Es posible que en las fechas inmediatamente posteriores a la toma de la presidencia por Duarte se note una mejora, mientras los responsables de la represión miden bien la coyuntura. Pero si esta coyuntura se complica por cuanto una cierta apertura política llevara a una mayor presencia de los movimientos de masas en San Salvador y en otras ciudades o centros más poblados, no es exagerado temer que la represión, quizá más racionalizada, se deje sentir de nuevo. Duarte puede afirmar que su actual presencia en el poder es cualitativamente distinta de su presencia en el poder durante los años más represivos del período 1980-1981, pero sus críticos pueden sostener que no dejará el poder aunque se dé la represión como no lo dejó en aquellos dos trágicos años, en que incluso llegó a desconocerla y eventualmente a disculparla. La pregunta queda abierta: en caso de un resurgimiento poderoso del movimiento de masas en la actual coyuntura de guerra ¿Con qué medios se le tratará de contener no sólo por parte del gobierno sino por parte de las temidas fuerzas para-militares?



Por otra parte Duarte y su partido no tienen la capacidad real de cambiar sustancialmente aquellos sectores, en los que reside una gran cuota del poder.

Respecto de la Fuerza Armada su capacidad actual es muy limitada, como lo demuestra a posteriori la ratificación en sus puestos de los jefes que han sido en los últimos años los responsables máximos y como se podía prever de antemano, dada la posición de la Fuerza Armada en la estructura del poder nacional y dado su conocido espíritu de cuerpo. Duarte no está ni siquiera en condición de hacer los cambios en la estructura militar que se hicieron tras el 15 de octubre de 1979. Podrá hacer pequeños cambios en la estructura de mando, podrá intentar, con la ayuda de Estados Unidos, que la Fuerza Armada se configure más como una fuerza democrática, respetuosa de los derechos humanos, pero no conseguirá la sumisión del estamento militar al poder civil ni en la conducción de la guerra ni en otras medidas que tengan que ver con ella o con los poderes y ventajas tradicionales que ha ido haciendo connaturales. Tal vez con los cuerpos de seguridad pueda lograrse algo más, pero no de un día para otro. Estos cuerpos tienen su propia inercia histórica y tienen sus modos propios de luchar contra lo que fácilmente se entiende por subversión, máxime si ésta vuelve a presentarse con las mismas características de los años pasados. Todo el mundo ve que no puede haber cambios profundos en el país sin que se den cambios profundos *en la estructura militar, pero estos cambios profundos* son difíciles de lograr sin una ruptura drástica para la que Duarte no tiene capacidad. El otro camino de cambios paulatinos es más posible, pero el resultado de esos cambios no es muy seguro. El nuevo gobierno y el nuevo presidente empeñados en mantener la institucionalidad, temerosos de ser desalojados del poder, no es probable



que corran muchos riesgos.

Respecto de la empresa privada la situación es también difícil. Duarte necesita de la empresa privada y la empresa privada necesita del presidente de la República. Esta mutua necesidad permite llegar a ciertos arreglos, pero al mismo tiempo muestra los límites de lo que el gobierno puede hacer. El gobierno tendrá que hacer concesiones importantes a la empresa privada tanto porque es necesaria para relanzar el desarrollo como porque la empresa privada es el núcleo de la concepción económica y política de Reagan; estas concesiones acabarán robusteciendo al sector y sus prácticas impositivas. Algo podrá hacerse, sin embargo, por seguir frenando lo que pudieran estimarse fuerzas estrictamente oligárquicas, que se verán forzadas a desplazarse hacia formas más modernizadas de capitalismo. Asimismo la necesidad de contentar a UPD permitirá el acometer algunas medidas reformistas, que pudieran limitar la prepotencia del sector empresarial. El pacto social podrá darse, pero será un pacto social cuyo principal favorecido será el sector empresarial privado.

Respecto de los sectores incontrolados del país la tarea tampoco será fácil. Puede observarse una cierta mejora paulatina de 1982 a 1984. Las razones de la mejora están fundamentalmente en el cambio de la situación que ya no exige la misma forma de terrorismo para mantener a raya el movimiento revolucionario y en el consiguiente y derivado cambio de la política norteamericana, presionada a su vez por la opinión pública, que necesita una imagen democrática para recabar mayor ayuda militar. Pero no puede olvidarse que



tanto la administración norteamericana como la salvadoreña piensan que lo primario es terminar con los movimientos revolucionarios armados y que a este principio debe subordinarse la política de los derechos humanos. Esto hace que en cualquier momento pueda volverse a prácticas pasadas, frente a las cuales el nuevo gobierno poco podrá hacer si se estiman necesarias por razones de seguridad nacional o por razones de estado. Recordemos una vez más que en el gobierno de alianza de los militares con la democracia cristiana, los llamados grupos incontrolados hicieron su devastadora y criminal tarea sin ningún freno ni de los militares ni de los demócratacristianos. Se apelaba entonces a las dos extremas, a la dificultad de encontrar a los asesinos, a la imposibilidad de encontrar pruebas fehacientes que condujeran a la condena de los culpables; pero se apelaba también a razones de seguridad, a razones de estado y se aceptaban explicaciones de los acontecimientos más graves que eran evidentemente falsas cuando no encubridoras. No es probable que esto pueda repetirse por el cambio de circunstancias y por el paso de algunos sectores de la lucha terrorista a la lucha política, de prácticas claramente ilegales a prácticas legales. Pero apenas podrá esperarse nada respecto de la aclaración y castigo de los delitos más horrendos de los años pasados y no mucho podrá esperarse en la finalización definitiva de las violaciones de los derechos fundamentales del hombre.

Una y otra vez se ha hablado de la necesidad de una renovación y un fortalecimiento del poder judicial. Las mayores atrocidades cometidas en el país y que pusieron a El Salvador en los puestos más altos de las listas internacionales del terror y de la muerte han pasado inadvertidas para el poder judicial. Este poder no mejorará de un día para otro. Son años de inca-



pacidad y de tolerancia. La tarea ha sido y es extraordinariamente difícil donde la amenaza a las jueces es recurso ordinario, cuando no la corrupción. Monseñor Romero en intervenciones memorables subrayó esta corrupción comprobada; cuando se le pidió el que mostrase las pruebas el respondió diciendo que eso precisamente es lo que tocaba hacer a los magistrados. A ningún gremio se le puede pedir habituales sacrificios heroicos. Tampoco al gremio judicial. Pero el problema está ahí y es otra vez un desafío gigantesco al gobierno, al que será muy difícil que se de respuesta adecuada. Y sin un poder judicial sano, fuerte y respetado difícil va a ser la tarea democratizadora del país.

Está asimismo el desafío de los movimientos revolucionarios. El FDR-FMLN no va a hacer fácil la tarea del próximo gobierno. Continuará la guerra y todo lo que esta guerra lleva consigo: sabotaje, destrucción, inseguridad, imposibilidad de desarrollo económico, polarización, etc. Continuará también la protesta popular porque siguen vivas algunas de las causas principales del descontento popular: necesidades básicas insatisfechas, paro e inflación, represión y violación de los derechos humanos. Continuará también el intento de crecimiento de los movimientos revolucionarios en los lugares en que se había estancado: sector estudiantil, sector laboral, etc. Nada de esto tiene fácil arreglo si no es a través de un difícil e improbable proceso de negociación, que no está en manos del actual gobierno abrirlo.

Son, pues, muy limitadas las perspectivas de mejoras sustanciales que puede ofrecer el gobierno democristiano. No por eso tiene cerradas todos los caminos de acción. Se siente la necesidad de hacer algo y esta necesidad pue-



de favorecer el que se hagan algunas cosas. Por otro lado, el proceso está en marcha y, aunque no es un proceso que toque los nervios vitales del país, puede no obstante llevar a etapas en que las soluciones sean más factibles.

Uno de los puntos principales para el nuevo gobierno va a ser la defensa de la institucionalidad democrática. En él puede haber una clara consolidación. El nuevo gobierno quiere cumplir con los cinco años de su mandato y lo quiere hacer gozando de las prerrogativas que le atribuye la Constitución. Si así fuera, algo se habría conseguido. Pero todo dependerá del modo como se consiga. Si se consigue vendiendo la soberanía a Estados Unidos, si se consigue sin entrar a los problemas de fondo del país, si se consigue con concesiones anti-constitucionales a los poderes fácticos consuetudinarios, de poco servirá el mantenimiento formal de la institucionalidad democrática. Lo que este país necesita es una real y profunda democratización y esta democratización, aunque incluye la defensa de la institucionalidad democrática, no se reduce a eso.

Ese proceso de democratización exige imperiosamente una apertura política. El actual gobierno tiene algunas posibilidades de avanzar en la apertura política iniciada en 1982. Esa apertura sólo ha alcanzado hasta ahora a los partidos que van desde la democracia cristiana hasta la extrema derecha y apenas en alguna medida a las fuerzas sindicales que han podido dar muestras de su existencia con graves y efectivos peligros para sus miembros y dirigentes. La posibilidad y el desafío actuales son profundizar y extender esta apertura; que realmente los distintos grupos sociales puedan organizarse, movilizarse,



manifestarse, luchar no violentamente por sus intereses. Esto implica un control estricto de los escuadrones de la muerte y de los grupos para-militares. Mucho se ha prometido sobre el particular. Grandes expectativas se han despertado. Lograr, por tanto, algo significativo en este punto, aunque no llegue al ideal deseado, sería un aporte de primera importancia no sólo para la democratización real del país sino también para la pacificación. De lo contrario quedará siempre abierto el argumento de que no es posible defender los propios derechos más que a través de la violencia y no por medio de la lucha política. El Estado tiene suficientes recursos para controlar, según las leyes, las acciones inconvenientes para la sociedad. Si usa medios criminales o permite que se usen con impunidad, de nada servirá que se hable de un gobierno democrático elegido por el pueblo. La violación de los derechos humanos seguirá siendo en consecuencia el termómetro que mida el estado de salud democrático del país.

Respecto de la pacificación hay algunas posibilidades, pero son realmente débiles. La pacificación implica la finalización de la guerra. Esta finalización desde el lado del gobierno tiene tres caminos: el intento del aplastamiento total del FMLN, el intento del progresivo y creciente desgaste del FMLN, un proceso de negociación. Ya se ha insistido en que este no es un problema que esté directamente en manos del gobierno. Pero el gobierno se va a plegar a lo que hoy es la política norteamericana y por ello va a preferir la segunda opción que no excluye pasar ni a la primera ni a la tercera. Algo podrá hacer en preparar caminos y contactos en favor de esta tercera, pero la situación para ello está inmadura y la capacidad del gobierno muy limitada. En



este mismo sentido, a pesar de las declaraciones, no será la política del Grupo de Contadora quien oriente la política centroamericana del nuevo gobierno, sino la política de Reagan y las propuestas de la comisión Kissinger.

Cinco años de presidencia que fomentaran la llegada de varios miles de millones de dólares propuestos por la comisión Kissinger podrían suponer un importante desarrollo económico, si es que éste no se ve imposibilitado o frenado por las exigencias de la guerra. En esto confían tanto el gobierno como la empresa privada. Pero la pregunta es si realmente van a llegar estos millones, si van a ser manejados honestamente y si la situación permite emplearlos eficazmente. Las tres condiciones son problemáticas, no obstante el gran interés que hay por conseguir un acelerado desarrollo económico que quitara bases al descontento popular y a la propuesta revolucionaria. Hasta ahora lo que se ha conseguido es evitar el colapso económico, aunque es evidente el descontento del sector labora, reflejado en huelgas constantes. Hay, sin embargo, un dato fundamental sobre el que poco se ha reflexionado, negativo desde el punto de vista de los derechos humanos, positivo desde el punto de vista del desarrollo económico: los setecientos mil salvadoreños que han salido del país en los últimos cuatro años; es improbable que muchos de ellos vuelvan, lo cual facilita luchar contra la presión demográfica y aun puede llevar a disminuir drásticamente las previsiones de población para el año dos mil, que es uno de los datos fundamentales de todo planteamiento económico y político racional. La guerra va a seguir determinando también este problema económico y el manejo de la guerra y de sus soluciones, insistimos, no está en manos del gobierno.



El probable crecimiento de la actividad de los partidos políticos y el sometimiento de esa actividad a cauces menos violentos puede ser un avance, no sustancial, en la democratización del país. Las elecciones de 1985 de gran importancia para la estructuración política interna van a determinar para bien y para mal la actividad de los partidos políticos en los próximos diez meses; para bien porque van a tener que entrar en un juego de apariencias democráticas y para mal, porque los principios determinantes de acción de ellos y del gobierno no van ir dirigidos a resolver los problemas más graves sino a mantener y acrecentar la clientela política propia. Esto vale sobre todo para el partido en el poder que va a luchar por aumentar notablemente el número de sus votos, de modo que desde 1985 pueda gobernar con una Asamblea más favorable y con el apoyo de las alcaldías más importantes, que la última votación ha mostrado están claramente en sus manos con pocas excepciones. Hasta marzo de 1985, el Gobierno se verá frenado por una Asamblea que no le es afecta.

La tarea, pues, es inmensa y las dificultades grandísimas. La tarea es tan enorme que ni siquiera con la colaboración sincera de todas las fuerzas del país se podía empezar a realizar. En vez de esa colaboración tenemos al país escindido en dos partes de desigual magnitud pero no de tan desigual efectividad; tenemos, además, una de las partes escindidas en dos tendencias que no sólo se disputan el poder sino que pretenden desarrollar programas económicos y políticos distintos, tal como se ha visto en la última pugna electoral. La posibilidad de la reconciliación nacional es así muy débil. Es quimérico pensar que a corto plazo se desprende el FDR del FMLN para entrar en un



juego político para el que no se le ofrecen seguridades mínimas y es también difícil de aceptar que ARENA vaya a colaborar con el PDC en la solución de los problemas más urgentes. Así las cosas no hay mucho campo para el optimismo, a pesar de la imagen triunfalista de las elecciones últimas. La lógica de los acontecimientos desatados apenas en mínima parte está en las manos de los actuales gobernantes y va a ser la lógica de los acontecimientos centrada en el conflicto principal la que va a dirigir a los gobernantes y no éstos a aquella. Tendrán que ponerse de acuerdo las principales fuerzas sociales para buscar una solución distinta, una vez visto que el camino de la guerra lleva a más guerra y no a la paz. ¿Por qué seguir probando durante más años lo que ya ha sido probado durante cuatro con tan enorme destrozo de vidas humanas y de recursos nacionales?

El gran desafío, después de estas elecciones como antes de ellas, sigue siendo la paz. Una paz que vendrá por un proceso de pacificación y no por un proceso de militarización. La paz no se consigue preparándose para la guerra sino preparándose para la paz, no se consigue preparando la guerra sino preparando la paz. El Salvador debe esforzarse por salir de la perspectiva norteamericana y del círculo de intereses norteamericanos y soviéticos para ponerse en una perspectiva salvadoreña y ante unos intereses salvadoreños y centroamericanos. Esto no puede lograrse mientras haya un enfrentamiento armado entre salvadoreños. En ese sentido el gran desafío del actual gobierno es forzar al FDR-FMLN a sentarse en una mesa de negociación. La negociación no es tanto responsabilidad del FDR-FMLN como responsabilidad del gobierno, que ha aceptado ser un gobierno de todos los salvadoreños y para todos los salvadoreños. La actitud y la postura del presidente colombiano podría



servir de precedente. Si, al parecer, todos esperan que el conflicto acabe en negociación, ¿Por qué no intentarla antes de que sea demasiado tarde para el ulterior desarrollo del país? ¿Por qué no medir de una vez por todas con objetividad y racionalidad las razones de cada parte y las fuerzas reales que les asisten sin dejar que sea la prolongación de un conflicto mortal el juez definitivo? Estas son las preguntas fundamentales que la algarabía de las elecciones no puede acallar. Las elecciones han cambiado algunas cosas, pero sólo servirán de algo si su resultado ayuda a empezar a resolver lo que es la crisis fundamental del país, la guerra.

31 de mayo de 1984.

